



**ANTEPROYECTO DE LEY DE CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN EN LOS MERCADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE OBRAS PÚBLICAS, ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA CREADAS PARA LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

1

La presente Ley, reguladora de la financiación privada de los contratos de concesión de obra pública, contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado y las sociedades de economía mixta creadas para la ejecución de contratos públicos, viene a completar el escalón legal del proceso de revisión de la legislación de contratos públicos iniciado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Efectivamente, aunque la Ley de Contratos del Sector Público se configuró como una norma llamada a sustituir en bloque a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, optó por mantener transitoriamente la regulación que ésta realizaba de la financiación privada de las concesiones de obras públicas. En consonancia con este planteamiento, en el apartado a) de la disposición derogatoria única de la Ley 30/2007 se exceptuaron de la derogación general decretada los artículos 253 a 260 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la disposición final décima emplazó al Gobierno para que en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor sometiese al Congreso un proyecto de ley sobre el régimen de financiación de las concesiones de obras públicas y de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

La ley cubre la financiación de estos dos tipos de contratos y, además, regula la financiación de sociedades de economía mixta constituidas para la ejecución de contratos públicos, como supuesto especial de colaboración público-privada institucional

2

Como norma general aplicable a estos tres supuestos, se regula la posibilidad de acceder a avales públicos en garantía de cualesquiera operaciones de endeudamiento, generalizando la previsión recogida en la legislación anterior para las emisiones de obligaciones por los concesionarios de obras públicas.





La regulación de los avales se completa, para los prestados por el Estado, con la modificación por la disposición final segunda del artículo 116.2.b) de la Ley General Presupuestaria, a fin de permitir que el Consejo de Ministros pueda autorizar avales no solo a favor de concesionarios de obras públicas, sino también a favor de los restantes sujetos a cuya financiación se refiere la Ley.

3

La financiación de los concesionarios de obras públicas se regula en el título II de la Ley, siguiendo de cerca los antecedentes normativos.

Se mantiene la consideración especial de las tres vías de financiación recogidas hasta ahora en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (emisión de valores, hipoteca de la concesión y créditos participativos), como supuestos que presentan regulaciones específicas frente a la legislación común cuando se utilizan por concesionarios de obras públicas.

En materia de control administrativo de las vías de financiación se mantiene el sistema vigente, sujetando a autorización la titulización de créditos y la constitución de hipoteca y a comunicación la emisión de obligaciones y la obtención de créditos participativos.

En concordancia con la idea de acentuar el interesamiento del concesionario, se exige a éste un nivel mínimo de fondos propios, generalizando la solución recogida en la legislación especial de autopistas. La efectividad de esta previsión requiere que se establezcan normas concordantes sobre el ritmo del desembolso de las aportaciones y que se garantice la efectividad de éstas, proscribiendo que puedan realizarse con cargo a reservas o al saldo de actualización de activos. Para los concesionarios que no revistan la forma de sociedad anónima se exige un nivel análogo de recursos propios.

En materia de emisión de obligaciones se ha circunscrito la posibilidad de rebasar los límites fijados en los artículos 282.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre Regulación de la emisión de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la forma de anónimas, asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del sindicato de obligacionistas, a aquellas sociedades cuyo exclusivo objeto sea la construcción y explotación de una obra pública en régimen de concesión.





En cuanto a la titulización de créditos las novedades radican en la fijación de un límite a la emisión, que no podrá superar el 80 por 100 de la inversión que deba realizar el concesionario; la supresión de las referencias a los privilegios de los créditos titulizados; y la eliminación como sustraendo, de los intereses abonados a los tenedores de títulos representativos de créditos en el cálculo de la indemnización que, en caso de resolución de la concesión, el concedente ha de poner a disposición de los mismos a falta de acuerdo.

En lo relativo a la hipoteca de la concesión se precisa que el importe de la deuda garantizada no podrá superar el 80 por 100 de las inversiones que deba realizar el concesionario y que la duración de la hipoteca no podrá exceder la de la concesión. Además, en atención al carácter jurídico público de la relación concesional y a los complejos elementos relacionados con la gestión de intereses generales que implica, se suprime la posibilidad de interponer la acción judicial de devastación prevista en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria, manteniendo solamente la acción administrativa dirigida a obtener medidas que preserven el valor económico de la concesión hipotecada. Por último, se simplifica el régimen registral de cancelación de cargas en caso de resolución de la concesión.

Respecto de los créditos participativos se ha explicitado la aplicabilidad de las normas generales del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, en caso de amortización anticipada, y se establece que, en el caso de créditos participativos otorgados por la entidad concedente, para amortizar anticipadamente el capital prestado el concesionario deberá abonar la comisión de reembolso fijada en el momento de la concesión del crédito.

4

La financiación de los adjudicatarios de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado a que se refiere el artículo 11 LCSP se regula en el título III de la Ley.

Debido a la multiplicidad de relaciones jurídicas que pueden ampararse bajo esta fórmula contractual y la diversidad de diseños de las correspondientes prestaciones que admite, las especialidades en materia de financiación se ligan a las previsiones establecidas en cada caso por los pliegos y a la efectiva realización de inversiones que, en definitiva, hayan de ceder en beneficio de la entidad contratante.

En relación con el régimen sustantivo del contrato, la disposición final primera modifica el artículo 11 de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir que el contrato de colaboración se utilice no solo por las Administraciones Públicas sino también por las Entidades Públicas Empresariales





5

El título IV se dedica a los medios de financiación de las sociedades de economía mixta constituidas para ejecutar contratos públicos, estableciendo dos limitaciones:

- a) las ampliaciones de capital deberán respetar la estructura de partícipes inicial
- b) la titulización de los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecución se le encomienda requerirá la previa autorización del órgano de contratación.

Además, la disposición adicional segunda regula la elección del socio privado aplicando los mismos requerimientos procedimentales que exige la adjudicación del contrato para cuya ejecución se constituye la sociedad de economía mixta, de acuerdo con las indicaciones recogidas en la *Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada* (C(2007)6661)

6

Además de la regulación expuesta, que constituye el núcleo de la ley, el texto modifica determinados extremos de la Ley de Contratos del Sector Público, a fin de mejorar la eficiencia del sistema de contratación.

Esta reforma parcial se recoge en la disposición final primera y afecta a los siguientes extremos, además de la mencionada ampliación del ámbito del contrato de colaboración:

Se modifica el artículo 118 para permitir que, a efectos de justificar la opción por la fórmula del contrato de colaboración, el órgano de contratación pueda servirse de la evaluación previa realizada anteriormente por otro órgano integrado en la misma Administración o en una entidad vinculada o dependiente de la misma, sin necesidad de reiterarla.

Se reforma el artículo 135 para precisar la documentación que debe aportar el adjudicatario provisional para poder consolidar la adjudicación, eliminando referencias genéricas. Por otra parte, se permite elevar a definitiva la adjudicación provisional antes de que transcurra el plazo general de 15 días, si ésta no es susceptible de recurso especial y siempre que el adjudicatario haya aportado la documentación exigible.





Se modifica, por último, el artículo 309 para disponer la integración en la Plataforma de Contratación del Estado de los perfiles del contratante de todos los órganos de contratación del sector estatal, a fin de centralizar de forma efectiva el acceso a toda la información relevante en materia de contratación.

## TITULO I Normas generales

### Artículo 1. *Objeto y finalidad.*

La presente Ley tiene por objeto regular las especialidades en la financiación de los concesionarios de obras públicas, adjudicatarios de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado y sociedades de economía mixta creadas para la ejecución de contratos públicos, en atención a la conveniencia de arbitrar medidas que faciliten el acceso del contratista a los medios financieros necesarios para el buen fin de los correspondiente contratos y a la necesidad de salvaguardar la realización de los fines de interés público que deben alcanzarse a través de ellos.

### Artículo 2. *Avales públicos.*

1. Las operaciones de crédito concertadas en el interior o exterior por los concesionarios de obras públicas, por las sociedades de economía mixta creadas para la ejecución de contratos públicos y por los adjudicatarios de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado podrán contar con el aval del Estado y de sus organismos públicos que se otorgará con arreglo a las prescripciones de la normativa presupuestaria.

La concesión del aval por parte de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, de sus organismos públicos respectivos y demás sujetos sometidos a esta Ley se otorgará conforme a lo que establezca su normativa específica.

2. No podrá concederse el aval si el concesionario de obras públicas ha constituido una hipoteca sobre la concesión o si los derechos de crédito del concesionario, del adjudicatario de un contrato de colaboración o de la sociedad de economía mixta se han incorporado a títulos negociables. De igual modo, la concesión del aval público impedirá la hipoteca de la concesión o la titulización de créditos mientras subsista el empréstito garantizado.





## TITULO II.

### Financiación de los concesionarios de obras públicas

#### Artículo 3. *Medios de financiación.*

Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios de financiación, los concesionarios de obras públicas podrán emitir valores negociables, hipotecar la concesión, y solicitar créditos participativos de acuerdo con las normas establecidas en este título.

#### Artículo 4. *Régimen de control.*

1. La emisión de valores que representen una participación en derechos de crédito a favor del concesionario y la constitución de hipoteca sobre la concesión requerirán autorización previa del órgano de contratación.

2. La autorización solo podrá denegarse cuando el buen fin del contrato u otra razón de interés público relevante lo justifiquen o cuando se incumpla el plan económico-financiero presentado por el concesionario.

3. El plazo para resolver sobre las autorizaciones será de un mes, contado desde la presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la correspondiente resolución, el interesado podrá considerar desestimada su solicitud.

4. La emisión de obligaciones y otros valores a la que se refiere el artículo 7 y la obtención de créditos participativos deberán comunicarse al órgano de contratación dentro del plazo de un mes a contar desde que se realice la emisión o se obtenga el crédito.

#### Artículo 5. *Recursos propios*

El capital social suscrito de la sociedad anónima concesionaria no podrá ser inferior al 10 por 100 de la inversión total que deba ser realizada por el concesionario. Un 25 por 100 del capital social deberá desembolsarse en el momento de constitución de la sociedad concesionaria y el resto podrá aportarse a medida que se vayan efectuando las inversiones previstas, de forma que, en cada momento, el desembolso no sea inferior al 10 por 100 de las inversiones realizadas. El desembolso no podrá realizarse con cargo al saldo de actualización de activos.





Los concesionarios que no revistan la forma de sociedad anónima deberán contar con un nivel de recursos propios superior al 10 por 100 de la inversión total que deban realizar

## SECCIÓN 1ª EMISIÓN DE VALORES NEGOCIABLES

### Artículo 6. *Régimen jurídico.*

Las emisiones de valores negociables por el concesionario se regirán por lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en los siguientes artículos.

### Artículo 7. *Emisión de obligaciones y otros valores.*

1. El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante la emisión de toda clase de obligaciones, bonos u otros valores negociables.

2. No podrán emitirse valores cuyo plazo de reembolso total o parcial finalice en fecha posterior al término de la concesión.

3. Siempre que el emisor sea una sociedad cuyo exclusivo objeto sea la construcción y explotación de una obra pública en régimen de concesión y, eventualmente, la explotación de sus zonas complementarias, y si la emisión ha sido objeto de registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el riesgo financiero correspondiente a los valores ha sido evaluado positivamente por una entidad calificadora reconocida por dicha entidad supervisora, no será de aplicación el límite del importe previsto en el artículo 282.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre Regulación de la emisión de obligaciones por sociedades que no hayan adoptado la forma de anónimas, asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del sindicato de obligacionistas. Tampoco será de aplicación este límite a las emisiones que se dirijan exclusivamente a inversores cualificados en los términos previstos en la normativa del mercado de valores





*Artículo 8. Incorporación a valores negociables de los derechos de crédito del concesionario.*

1. Podrán emitirse valores que representen una participación en uno o varios de los derechos de crédito a favor del concesionario consistentes en el derecho al cobro de las tarifas, los ingresos que pueda obtener por la explotación de los elementos comerciales relacionados con la concesión, así como los que correspondan a las aportaciones que, en su caso, deba realizar la Administración o Entidad concedente. La cesión de estos derechos se formalizará en escritura pública que, en el supuesto de cesión de las aportaciones, se deberá notificar al órgano contratante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

Los valores negociables anteriormente referidos se representarán por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta, podrán afectar derechos de crédito previstos para uno o varios ejercicios económicos distintos y ponerse en circulación en una o varias emisiones.

El volumen total de los valores emitidos no podrá superar el 80 por 100 de las inversiones asociadas a la concesión que deba realizar el concesionario.

Tanto las participaciones como directamente los derechos de crédito a que se refiere el primer párrafo de este apartado podrán incorporarse a fondos de titulización de activos que se regirán por la normativa específica que les corresponda.

De la suscripción y tenencia de estos valores que no esté limitada a inversores institucionales o profesionales, se dejará nota marginal en la inscripción registral de la concesión correspondiente. Asimismo, las características de las emisiones deberán constar en las memorias anuales de las sociedades que las realicen.

2. Siempre que designen previamente a una persona física o jurídica que actúe como representante único ante la Administración a los solos efectos previstos en este apartado, los tenedores de valores a que se refiere el apartado 1 de este artículo podrán ejercer las facultades que se atribuyen al acreedor hipotecario en los apartados 1 y 2 del artículo 11. Si, además, se hubiese previsto expresamente la satisfacción de los derechos de los tenedores antes del transcurso del plazo concesional, éstos podrán ejercer las facultades a que se refiere el apartado 3 del artículo 10 a partir del vencimiento de los valores.

3. Cuando se produzca causa de resolución de la concesión imputable al concesionario sin que los acreedores hayan obtenido el reembolso





correspondiente a sus títulos, el órgano de contratación podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones:

a) Salvo que las causas de extinción fuesen las previstas en el artículo 245.b) de la Ley de Contratos del Sector Público, acordar el secuestro de la concesión conforme a lo previsto en el artículo 234 de dicho texto legal a los solos efectos de satisfacer los derechos de los acreedores sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno.

b) Resolver la concesión, acordando con el representante de los acreedores la cuantía de la deuda y las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la entidad concedente quedará liberada con la puesta a disposición de los acreedores de la menor de las siguientes cantidades:

- El importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- La diferencia entre el valor nominal de la emisión y las amortizaciones parciales que se hubieran producido.

4. Si se produjera causa de resolución no imputable al concesionario y los acreedores no se hubiesen satisfecho íntegramente de sus derechos, el órgano de contratación podrá optar por actuar conforme a lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior o bien por resolver la concesión acordando con el representante de los acreedores la cuantía de la deuda y las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la entidad concedente quedará liberada con la puesta a disposición de los acreedores de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público .

5. Quedará siempre a salvo la facultad de acordar la licitación de una nueva concesión una vez resuelta la anterior.

## SECCIÓN 2ª HIPOTECA DE LA CONCESIÓN

### Artículo 9. *Admisibilidad de la hipoteca de la concesión.*

1. Las concesiones de obras públicas serán hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.





2. No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras públicas en garantía de deudas que no guarden relación con la concesión correspondiente.

3. El importe de la deuda garantizada no podrá superar el 80 por 100 de las inversiones asociadas a la concesión que deba realizar el concesionario. La duración de la hipoteca no podrá exceder la de la concesión.

Artículo 10. *Derechos del acreedor hipotecario.*

1. Queda excluida, en relación con la hipoteca de concesiones de obras públicas la acción de devastación prevista en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria. Cuando el valor de la concesión hipotecada sufriera grave deterioro por causa imputable al concesionario, el acreedor hipotecario podrá solicitar del órgano de contratación pronunciamiento sobre la existencia efectiva de dicho deterioro. Si éste se confirmara podrá, asimismo, solicitar de aquél que, previa audiencia del concesionario, ordene a éste hacer o no hacer lo que proceda para evitar o remediar el daño. El incumplimiento por el concesionario de estas medidas constituirá causa de resolución de la concesión.

2. Cuando procediera la resolución de la concesión por incumplimiento de alguna de las obligaciones del concesionario, el órgano de contratación, antes de resolver, dará audiencia al acreedor hipotecario a efectos de que éste pueda solicitar subrogarse en su cumplimiento directamente o a través de una entidad participada, lo que se acordará si se considera compatible tal ofrecimiento con el buen fin de la concesión, siempre que el acreedor cumpla con los requisitos exigidos al concesionario.

3. Si la obligación garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente al tiempo de su vencimiento, antes de promover el procedimiento de ejecución correspondiente, el acreedor hipotecario podrá ejercer las siguientes facultades siempre que así se hubiera previsto en la correspondiente escritura de constitución de hipoteca

a) Solicitar del órgano de contratación que, previa audiencia del concesionario, disponga que se asigne a la amortización de la deuda una parte de la recaudación y de las cantidades que, en su caso, la entidad concedente de la obra tuviese que hacer efectivas al concesionario. A tal efecto, se podrá, por cuenta y riesgo del acreedor, designar un interventor que compruebe los ingresos así obtenidos y se haga cargo de la parte que se haya señalado, la cual no podrá exceder del porcentaje o cuantía que previamente se determine.





b) Si existiesen bienes aptos para ello, solicitar del órgano de contratación que, previa audiencia al concesionario, le otorgue la explotación durante un determinado período de tiempo de todas o de parte de las zonas complementarias de explotación comercial. En el caso de que estas zonas estuvieran siendo explotadas por un tercero en virtud de una relación jurídico-privada con el concesionario, la medida contemplada por este apartado deberá serle notificada a dicho tercero con la indicación de que queda obligado a efectuar al acreedor hipotecario los pagos que debiera hacer al concesionario.

#### Artículo 11. *Ejecución de la hipoteca.*

1. El adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria quedará subrogado en la posición del concesionario, previa autorización administrativa, en los términos que se establecen en el apartado siguiente.

2. Todo el que desee participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en calidad de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario si la legislación sectorial no lo impidiera, deberá comunicarlo al órgano de contratación para obtener la oportuna autorización administrativa, que deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de 15 días contados desde la presentación de la correspondiente solicitud ante el órgano de contratación, y sin la cual no se le admitirá en el procedimiento. La autorización tendrá carácter reglado y se otorgará siempre que el petitionerario cumpla los requisitos exigidos al concesionario. Si hubiera finalizado la fase de construcción o ésta no formara parte del objeto de la concesión, sólo se exigirán los requisitos necesarios para llevar a cabo la explotación de la obra.

3. Si la subasta quedara desierta o ningún interesado fuese autorizado por el órgano de contratación para participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria, el órgano de contratación podrá optar por alguna de las siguientes actuaciones en el supuesto de que el acreedor hipotecario autorizado, en su caso, para ser concesionario no opte por el ejercicio del derecho que le atribuye el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

a) Acordar el secuestro de la concesión conforme a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público sin que el concesionario pueda percibir ingreso alguno. Se dará trámite de audiencia al acreedor hipotecario para ofrecerle la posibilidad de proponer un nuevo concesionario. Si la propuesta no se produjera o el candidato propuesto no cumpliera los requisitos exigibles conforme a lo establecido en el apartado anterior, se procederá a la licitación de la misma concesión en el menor plazo posible.





b) Resolver la concesión y, previo acuerdo con los acreedores hipotecarios, fijar la cuantía de la deuda y las condiciones en que deberá ser amortizada. A falta de acuerdo, la entidad concedente quedará liberada con la puesta a disposición de los acreedores del importe de la indemnización que correspondiera al concesionario por aplicación de lo previsto en el artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público.

*Artículo 12. Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional.*

1. Cuando procediera la resolución de la concesión y existieran titulares de derechos o cargas inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad sobre la concesión, se observarán las siguientes reglas:

a) El órgano de contratación, comenzado el procedimiento, deberá solicitar para su incorporación al expediente certificación del Registro de la Propiedad, al objeto de que puedan ser oídos todos los titulares de tales cargas y derechos.

b) El registrador, al tiempo de expedir la certificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá extender nota al margen de la inscripción de la concesión sobre la iniciación del procedimiento de resolución. Tal nota servirá de notificación a los titulares de derechos inscritos o anotados con posterioridad a la extensión de la misma.

c) Para cancelar los asientos practicados a favor de los titulares de las citadas cargas y derechos, deberá mediar resolución administrativa firme que declare la resolución de la concesión y el previo depósito a disposición de los referidos titulares de las cantidades y eventuales indemnizaciones que la Administración debiera abonar al concesionario conforme a lo previsto en el artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público. Los asientos posteriores a la nota de expedición de la certificación se cancelarán bastando para ello una mención genérica en la resolución administrativa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para el caso de que la subasta quedara desierta, cuando la resolución de la concesión procediera por causa imputable al concesionario, los titulares de los derechos y cargas a que se refiere el apartado precedente podrán ejercitar, por su orden, el derecho de subrogarse en la posición jurídica del concesionario, siempre que, por reunir los requisitos necesarios para ello, fueran autorizados previamente por el órgano de contratación.





### SECCIÓN 3ª CRÉDITOS PARTICIPATIVOS

#### Artículo 13. *Créditos participativos.*

1. Los concesionarios de obras públicas podrán financiarse mediante créditos participativos. La parte variable de la remuneración del prestamista se fijará por referencia a los ingresos del concesionario.

2. El concesionario podrá amortizar anticipadamente el capital prestado en las condiciones pactadas, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, en cuanto a la necesidad de ampliar correlativamente sus fondos propios.

3. Las entidades concedentes de la obra pública podrán contribuir a la financiación de la misma mediante el otorgamiento de créditos participativos. En tales casos, y salvo estipulación expresa en contrario, el concesionario no podrá amortizar anticipadamente el capital prestado, a no ser que la amortización anticipada implique el abono por el concesionario de la comisión de reembolso fijada en el momento de la concesión del crédito.

### TITULO III.

#### **Financiación de los adjudicatarios de contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado**

#### Artículo 14. *Medios de financiación.*

1. Cuando se determine el régimen de remuneración del contratista, con el alcance previsto en las letras d), e) y f) del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, podrán establecerse previsiones sobre las garantías que conforme a lo previsto en esta Ley puede obtener el contratista para la captación de financiación privada para la ejecución del contrato.

2. El contrato podrá prever un régimen de notificación por el contratista de las operaciones financieras que concierte para la financiación del contrato.

En el caso que procediese la resolución del contrato, el órgano de contratación, antes de acordar ésta, dará audiencia a los acreedores por si éstos ofrecieran subrogarse en el cumplimiento del contrato, directamente o a través de una entidad participada, en condiciones que se consideren compatibles con su buen fin, siempre que reúnan los requisitos exigidos al adjudicatario.





4. Cuando la ejecución del contrato lleve aparejados costes de inversión iniciales y se prevea que las obras o equipamientos que se generen vayan a incorporarse al patrimonio de entidad contratante al concluir o resolverse el contrato y se aplicase el régimen de notificación previsto en el apartado anterior, se podrán establecer previsiones que, cuando proceda la resolución del contrato, permitan a aquélla poner a disposición de los acreedores una cantidad no superior al 80% del coste real de las inversiones realmente ejecutadas detrayendo esta cantidad de la liquidación del contrato.

#### TITULO IV.

#### Financiación de las sociedades de economía mixta

##### Artículo 15. *Medios de financiación.*

Sin perjuicio de la posibilidad de utilizar medios de financiación tales como emisión de obligaciones, empréstitos o créditos participativos, las sociedades de economía mixta constituidas para la ejecución de un contrato público en el marco de una colaboración público privada de carácter institucional a que se refiere la disposición adicional segunda podrán:

a) Acudir a ampliaciones de capital, siempre que la nueva estructura de capital no modifique las condiciones esenciales de la adjudicación, salvo que hubiera estado prevista en el contrato.

b) Titulizar los derechos de cobro que ostenten frente a la entidad adjudicadora del contrato cuya ejecución se le encomienda, previa autorización del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos previstos en la normativa sobre mercado de valores.

##### Disposición adicional primera. *Orden jurisdiccional competente.*

El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten en relación con la aplicación de la regulación de los medios de financiación regulados en la presente Ley será competencia del orden jurisdiccional civil. No obstante, será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con las autorizaciones y actos de las entidades adjudicadoras sujetos al derecho administrativo.





Disposición adicional segunda. *Régimen de adjudicación de contratos públicos en el marco de una colaboración público privada institucional*

Los contratos públicos podrán adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concorra capital público y privado, siempre que la elección del socio privado se haya efectuado de conformidad con la normas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto y siempre que no se introduzcan modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la selección del socio privado.

En los pliegos que deban regir el procedimiento de selección del socio privado habrán de recogerse todos los elementos definitorios de la relación entre éste y la entidad adjudicadora, así como los relativos a la relación contractual entre la entidad adjudicadora y la sociedad de capital mixto, y, en particular, el contrato público o la concesión que se ha de adjudicar a la sociedad y los estatutos de ésta. Igualmente deberán expresarse con claridad y precisión las posibilidades de prórroga o modificación del contrato público o de la concesión adjudicada a la sociedad de economía mixta, así como el régimen de encomienda eventual de nuevas tareas en el marco del contrato previamente adjudicado, detallando aquéllas y las condiciones en que tal encomienda podrá producirse.

Disposición derogatoria. *Derogación normativa.*

Quedan derogados los artículos 253 a 260 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público*

1. El artículo 11 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público quedará redactado como sigue:

“Artículo 11. *Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.*

1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado aquéllos en que una Administración Pública o una Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de





financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya sido encomendado.

2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma prevista en el artículo 118, que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas.
3. El contratista puede asumir, en los términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su ejecución y contratar los servicios precisos.
4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.”

2. El artículo 118 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, quedará redactado como sigue:

“Artículo 118. Evaluación previa.

1. Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, la Administración o entidad contratante deberá





elaborar un documento de evaluación en que se ponga de manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, no se encuentra en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de establecer los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el contrato, y se efectúe un análisis comparativo con formas alternativas de contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que recomienden la adopción de esta fórmula de contratación.

2. La evaluación a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse de forma sucinta si concurren razones de urgencia no imputables a la Administración o entidad contratante que aconsejen utilizar el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para atender las necesidades públicas.
3. No será necesario realizar una nueva evaluación cuando un órgano integrado en la misma Administración o entidad que aquél que pretenda realizar el contrato, o en la Administración de la que dependa éste o a la que se encuentre vinculado, la hubiese efectuado previamente para un supuesto sustancialmente análogo.”

3. El artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, quedará redactado como sigue:

*“Artículo 135. Clasificación de las ofertas y adjudicación provisional y definitiva del contrato.*

1. El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios a que hace referencia el artículo anterior, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes, y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la que resulte económicamente más ventajosa. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.





El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

2. La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados.
3. La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 en cuanto a la información que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su remisión será de cinco días hábiles. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato.
4. Cuando el contrato a adjudicar sea uno de los enumerados en el artículo 37.1, la elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor, sin exceder el de un mes.

Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2, y de haber constituido la garantía definitiva que, en su caso, sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos. La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo señalado en el párrafo primero de este apartado,





siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada, y sin perjuicio de la eventual revisión de aquélla en vía de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 37. Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en este párrafo, sin que se exceda el de un mes.

5. En contratos distintos a los enumerados en el artículo 37.1, la adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que el adjudicatario haya presentado la documentación a que se refiere el segundo párrafo del apartado anterior, a cuyo efecto se le concederá un plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicación provisional en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de contratación. Las normas autonómicas de desarrollo de esta Ley podrán ampliar los plazos establecidos para la presentación de la documentación y para la elevación a definitiva de la adjudicación provisional, siempre que no se exceda el plazo de veinte días hábiles.
6. Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo del apartado anterior.

Este mismo procedimiento podrá seguirse en el caso de contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato ya iniciado y que haya sido declarado resuelto.”

4. El apartado 1 del artículo 309 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, quedará redactado como sigue:

“1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una





plataforma electrónica que permita dar publicidad a través de INTERNET a las convocatorias de licitaciones y sus resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a los contratos que celebren, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos. En todo caso, los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector estatal deberán integrarse en esta plataforma.”

Disposición final segunda. *Modificación de la Ley General Presupuestaria.*

La letra b) del apartado 2 del artículo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, queda redactada como sigue:

- b) Personas naturales o jurídicas para financiar bienes e inversiones en general que deban revertir a la Administración General del Estado y hayan de quedar afectos a concesión administrativa, o deban adquirirse o realizarse en el marco de un contrato de concesión de obra pública o de colaboración entre el sector público y el sector privado, o por una sociedad de economía mixta creada para ejecutar uno de estos contratos.

Disposición final tercera. *Títulos competenciales*

La presente Ley se dicta en ejercicio de las competencias sobre legislación mercantil y procesal y legislación civil atribuidas al Estado por las reglas 6ª y 8ª del artículo 149.1 de la Constitución, en lo que se refiere a la regulación de las especialidades de los instrumentos de financiación contemplados en esta ley y las previsiones de la disposición adicional primera, y las competencias sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas, procedimiento administrativo común y legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas atribuidas al Estado por la regla 18ª del mismo artículo 149.1 de la Constitución, en lo que se refiere a las potestades de control administrativo sobre estos instrumentos financieros, y a la regulación contenida en la disposición adicional segunda y disposición final segunda, siendo en consecuencia de aplicación general en todo el Estado, salvo lo previsto en el apartado 3 del artículo 4.

Disposición final cuarta. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor....